

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., treinta (31) de agosto de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00260-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por la ciudadana **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484 contra la **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PROTECCIÓN**, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA – COLPENSIONES** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**.

ANTECEDENTES

La ciudadana **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484 a nombre propio inicia acción de tutela contra la **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PROTECCIÓN**, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA – COLPENSIONES** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO** por considerar que se le están vulnerando los **DERECHOS FUNDAMENTALES AL MINIMO VITAL, LA VIDA, LA SEGURIDAD SOCIAL Y PETICIÓN**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Indica que su nombre era ALEXANDRA CUCA ESPEJO, sin embargo, dado que su padre hizo una aclaración de su apellido ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ella hizo el cambio de su apellido CUCA por el de SAAVEDRA, modificación inscrita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que su nombre actual responde al de Alexandra Saavedra Espejo.

Refiere que estuvo vinculada desde julio de 1993 al Instituto de Seguro Social hoy en día Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, haciendo sus aportes en las empresas Corredores Asociados S.A hoy Davivienda, desde diciembre 91 hasta junio de 1993, la Organización Luis Carlos Sarmiento desde agosto de 1988 hasta abril de 1990 y Colomb Sewin Machine Comp, durante los años de 1994 y 1995, finalmente Madesas S.A.S para el año de 1996.

Manifiesta que para el año 2017 hizo el traslado de su cuenta de Colpensiones para la AFP Porvenir y ante la negativa de Colpensiones de no tener registrada la información sobre los aportes realizados por las empresas citadas en párrafo que antecede, solicitó las certificaciones laborales demostrando que estuvo vinculada con estas y además que aquellas hicieron los correspondientes aportes a pensión como lo ordena la ley.

Que con el objeto de normalizar su historia laboral solicito desde hace dos años a Colpensiones le entregara un estado de cuenta para aportarlos a la AFP PORVENIR; sin embargo, tanto Colpensiones como Porvenir, se endilgan responsabilidades y trasladan omisiones; sin que a la fecha le hayan resuelto y aclarado acerca de las semanas cotizadas con la empresa Luis Carlos Sarmiento Angulo, Corredores Asociados hoy Davivienda.

Refiere que, el 01 de junio de 2017, solicito a la AFP Porvenir solicito que se incluyeran en su historia laboral las semanas que estaban en Colpesiones, además de las cotizadas en la AFP Porvenir, que mediante comunicación de mayo 10 de 2018, le respondieron: *“De acuerdo a su solicitud relacionada con la normalización de su historia laboral validad para bono le informamos :...efectivamente usted tiene derecho a un bono pensional , con la información que hemos gestionado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su bono está representado en un total de 206, 14 semanas cotizadas al régimen donde usted venia afiliado... y se encuentra emitido desde el 14 de noviembre de 1997...Sin embargo esta Administradora procedió a solicitar una nueva liquidación de su Bono Pensional a través del interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales – OBP- el cual registra un aumento en el tiempo laborado , por ende en el valor del mismo. De acuerdo con las continuas actualizaciones que realiza Colpensiones a la OPB, por el cual es necesario precisar que con el fin de normalizar su historia laboral oficial y solicitar una nueva emisión de su Bono Pensional, se hace necesario nos remita el formato adjunto debidamente diligenciado solicitando la anulación de su Bono Pensional...”...Es importante resaltar que el Bono Pensional se hace efectivo única y exclusivamente para el reconocimiento de una prestación , quiere esto decir, que el valor se verá reflejado en su cuenta de ahorro individual cuando exista un trámite de pensión sea por vejez, invalidez o muerte”.*

Señala que, a pesar de que ha puesto 3 derechos de petición solicitando le definan en donde se encuentra su bono pensional, la AFP Porvenir no le ha respondido más que evasivas sin que pueda normalizar su historia laboral, señalándole las accionadas Colpensiones y Porvenir que es el Ministerio de Hacienda y crédito Publico la entidad que no quiere realizar el traslado de su bono pensional.

Indica que lo que pudo haber sucedido con el reporte de las semanas ante Colpensiones es que las certificaciones estaban a nombre de Alexandra Cuca Espejo y en la AFP Porvenir las semanas cotizadas estaban a nombre de Alexandra Saavedra Espejo, sin embargo, hizo entrega a las accionadas de copias de la escritura pública del cambio de apellido, y el registro civil que valida la modificación.

Manifiesta que a pesar de todo el trámite que ha realizado hasta la fecha y ya desde hace dos años, las accionadas le han dilatado la solución a normalizar su historia laboral, obstaculizando su sueño de pensionarse y aunque aún no cumple con los requisitos para solicitar la prestación económica de la pensión de vejez o invalidez, requiere normalizar su historia laboral para solicitar ante la AFP PORVENIR la entrega del bono pensional previa emisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Finalmente, manifiesta que, es madre cabeza de familia y debe estar pendiente de su hijo en estos momentos de emergencia sanitaria, por lo que el pago del Bono Pensional

puede ayudarles ya que sus ingresos son muy reducidos; aunado a lo anterior tiene un hijo con discapacidad mental y física, padece convulsiones y no cuenta con los recursos para sus medicinas, terapias, exámenes médicos arriendo, servicios públicos y todo lo que implica sostener el hogar.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales **DE PETICIÓN, MINIMO VITAL y SEGURIDAD SOCIAL** y en consecuencia se ordene a la **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PROTECCIÓN**, realice las acciones necesarias para que autoricen y se reconozca la prestación económica de la pensión, o en su defecto la entrega de bono pensional al cumplir los requisitos exigidos por la norma por parte de la accionante

Por otra parte, se ordene a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA – COLPENSIONES** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO** se realicen todas las actuaciones necesarias para que se autorice y se entregue a la AFP PORVENIR la historia laboral actualizada y normalizada durante el tiempo en el que estuvo afiliada la señora Alexandra Saavedra Espejo (antes Alexandra Cuca Espejo).

Ordenar al **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO** – Oficina de Bonos Pensionales procedan a reconocer, ordenar y pagar el Bono Pensional correspondiente a la señora **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO**.

PRUEBAS

La parte accionante aportó de manera posterior con el escrito de la tutela las pruebas que pasan a relacionarse, en virtud de lo anterior, y dado que la notificación que se surtiera a los accionados no se anexo las pruebas adjuntas, solo se tendrán en cuenta aquellas de las que las partes tuvieron conocimiento; tales como los escritos contentivos de los derechos de petición y las respectivas contestaciones; lo anterior en virtud al debido proceso, derecho a la defensa y contradicción de cada uno de los accionados.

Escrito dirigido a Porvenir Bogotá del 01 de junio de 2017 bajo el radicado 019010525967800.

Contestación del 2017-10-20 dirigida a la señora Alexandra Saavedra por parte de Porvenir.

Escrito dirigido a Porvenir del 10 de octubre de 2017 bajo el radicado 0190105026425400.

Respuesta del 2017-06-13 dirigido a la señora Alexandra Saavedra proveniente de Porvenir.

Respuesta 2018-05-10 dirigido a la señora Alexandra Saavedra proveniente de Porvenir con fecha 2018-05-10.

Escrito dirigido a Porvenir del 30 de abril de 2018 con referencia: Solicitud de traslado de Colpensiones a Porvenir.

Respuesta de Colpensiones del 11 de septiembre de 2019, 10 de junio de 2019 Instituto de Seguros Sociales Aviso de entrada del trabajador.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.-Admitida la tutela el 18 de agosto de 2020, se ordenó la notificación a la **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PORVENIR, la ADMINISRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 18 de agosto de 2020, se notificó a través del correo institucional del Juzgado a la **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PORVENIR, la ADMINISRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- Dentro del término legal conferido allego contestación a la acción de tutela la accionada **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PORVENIR, la ADMINISRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**

CONTESTACIÓN ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PORVENIR.

La accionada refirió: “(...) Es claro que la accionante NO HA SIDO DECLARADO INVALIDO, NO HA FALLECIDO Y TAMPOCO HA CUMPLIDO LA EDAD MINIMA.

Por lo tanto, antes de que el afiliado cumpla 57 años de edad, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones no puede reconocer prestación pensional (salvo que, se insiste la persona muera, o sea calificada como invalida por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez)”.

CONTESTACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.

La entidad accionada refirió: “(...) Respecto al bono pensional de la señora ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO, la Oficina de Bonos Pensionales se permite informar que el bono pensional de la señora en mención había sido emitido mediante Resolución No. 2057de fecha 03 de mayo de 2004.

No obstante lo anterior, con posterioridad a la emisión del bono pensional de la accionante y como consecuencia de las actualizaciones periódicas que del archivo laboral masivo se encuentra efectuando la Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES (Antes ISS) se produjo para el caso de la señora Alexandra Saavedra Espejo, un cambio en la historia laboral válida para bono pensional que genero una variación. Lo anterior, tal y como se evidencia en la última liquidación provisional generada por el sistema interactivo de la OBP en respuesta a la solicitud que al respecto elevó la AFP PORVENIR en fecha 31 de mayo de 2019.

Así las cosas y debido al cambio en la historia laboral de la señora Alexandra Saavedra Espejo, la AFP Porvenir solicito la anulación del bono pensional, procedimiento llevado a cabo por la OBP por medio de la Resolución No. 18670 de fecha 13 de noviembre de 2008, esto con el fin de que la AFP PORVENIR adelante las gestiones que resulten pertinentes para lograr la recuperación y consolidación de la historia laboral para bono pensional de la señora Alexandra Saavedra Espejo, dado que, si tenemos en cuenta la

información reportada por el Presidente el ISS (hoy Colpensiones) a esta oficina, el accionante de la referencia NO tiene derecho a bono pensional, por cuanto no cumple con el requisito mínimo de semanas cotizadas exigido por la ley para que pueda acceder a este beneficio (150 semanas, Artículo 115 Ley 100 de 1993).

La principal razón por la cual la señora ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO no tiene derecho a bono pensional, es porque tal y como se indicó anteriormente, de conformidad con la historia laboral reportada tanto por el ISS (Hoy Colpensiones) como por la AFP Porvenir, la accionante no cumple con el requisito legal establecido por el artículo 115 de la Ley 100 de 1993”.

CONTESTACIÓN ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

La entidad accionada, refirió: “(...) De conformidad con la presente acción es importante indicar que la señora ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO NO se encuentra afiliada a Colpensiones, la afiliación se encuentra activa con la AFP PORVENIR SA.

Así mismo y teniendo en cuenta lo pretendido se consultó el expediente pensional del accionante y se evidencio que Colpensiones a través de la Dirección de historia laboral mediante oficio BZ2019_7700479-2659029 del 11 de septiembre de 2019, dio respuesta a la petición presentada por el accionante, en la que se solicitó la corrección de la historia laboral.

La mencionada comunicación, fue entregada a la dirección aportada por la accionante el 15 de septiembre de 2019, como se evidencia en guía de entrega allegada por la empresa de mensajería la cual se anexa a la presente.

De igual manera es importante informar que posterior a la radicación antes mencionada NO se evidencia petición o solicitud pendiente por resolver, ni radicación de la documentación solicitada.”

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios

ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

La ciudadana **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484 se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de **PETICIÓN, MINIMO VITAL y SEGURIDAD SOCIAL** en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la En el asunto de la referencia **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** es una empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, encargada de resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales de los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pertenecientes y administrados por el Instituto de Seguros Sociales –ISS; por otra parte **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PORVENIR**, es una administradora de fondos de pensiones de carácter privado al que está afiliada la accionante, y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**, es una entidad de carácter público, y de acuerdo con la Ley responde por la Liquidación, Emisión, Expedición, Redención, Pago o Anulación de Bonos Pensionales o Cupones de Bonos Pensionales a cargo de la Nación (Artículo 11 del Decreto 4712 de 2008, modificado por los Decretos 192 de 2015 y 848 de 2019), además de ser las entidades a quienes se le atribuye vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta

a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

DERECHO FUNDAMENTAL SEGURIDAD SOCIAL

“El artículo 48 de la Carta Política, dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Para esta Corporación la seguridad social es un derecho de raigambre fundamental, que debe ser definido de la siguiente manera: “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”. (Sentencia T-043/2019).

DERECHO FUNDAMENTAL MINIMO VITAL

El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional". (Sentencia T 678/17).

DEL CASO EN CONCRETO

Corresponde a esta Juzgadora determinar en la presente acción constitucional si la **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PORVENIR, la ADMINISRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** se encuentran vulnerando los derechos fundamentales correspondientes a la **PETICIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL** de la señora **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484; al no proceder a hacer la corrección a la historia laboral de la accionante y posterior emisión y pago del bono pensional.

Obra escrito contentivo de derecho de petición del 01 de junio de 2017, dirigido a Porvenir con radicado 0190105025867800 mediante el cual se peticiona: “(...) solicito a ustedes se me incluyan las semanas cotizadas que me hacen falta de las

certificaciones que traigo de las empresas Corredor Asociados, y de la Organización Luis Carlos Sarmiento que no han sido incluidas”.

Se adjuntó contestación dada por Porvenir el 2017-10-2020, del que se lee: “(...) realizadas las validaciones pertinentes a los certificados adjuntos en su escrito de la tarea 8904 existe información faltante, para lo cual es necesario nos informe fecha exacta de ingreso, retiro, NIT del empleador o número patronal si son anteriores al año 1995, toda vez que no fue posible obtener la información en dichos documentos.

Así las cosas, quedamos a la espera que nos allegue dicha información para proceder a solicitar a Colpensiones el cargue de los tiempos con los empleadores solicitados.

Es válido mencionar, que Porvenir actúa como intermediario entre nuestros afiliados y las entidades involucradas, gestionando y normalizando la historia laboral cuyos aportes fueron realizados al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), Cajas o Entidades encargadas de manejar sus propios pasivos pensionales, y así posteriormente lograr la normalización y emisión de los Bonos Pensionales. Sin embargo, es de aclarar que no está a nuestro alcance determinar la fecha o tipo e respuesta de las entidades que consultamos”.

Derecho de petición del 13 de octubre de 2017, dirigido a Porvenir, bajo e radicado 0190105026425400, en el que se peticiona: “ (...) le solicito a ustedes me den una respuesta concreta sobre una solicitud radicada en junio del 2017, TN 8904279 ya que en junio me informan que los tiempos ya están certificados por las entidades en las cuales trabaje, pero que a la fecha, ya han pasado cuatro (04) meses y aun por parte de ustedes no la veo reflejado en mi historia laboral. Solicito en cuanto tiempo se podría realizar la normalización”.

Respuesta dada por Porvenir, el 2017-06-13 del que se lee: “ (...) validando en nuestro sistema, confirmamos que la información registrada en su comunicado con los empleadores CORREDORES DAVIVIENDA S.A y ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA se ingresó en su historia laboral, que contribuye con el proceso de conformación de su historia laboral oficial con destino a Bono Pensional , por lo tanto, esta Administradora procederá a solicitar la respectiva información , ante las entidades encargadas de certificar sus vínculos laborales con fin de consolidar dicha historia. Remitimos historia laboral recordada donde se registraron los vínculos faltantes de Colpensiones.

Una vez se tenga normalizada la misma, se solicitará la liquidación, emisión, expedición y redención de su bono, previa autorización por parte suya, con destino a financiar las prestaciones que haya lugar. Es importante aclarar, que Colpensiones registra la información completa porque a esa entidad realizaron los aportes, pero dependemos del Ministerio de Hacienda que nos lo certifique”.

Petición del 30 de abril de 2018, dirigida a Porvenir, peticionando: “(...) Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy atentamente para solicitarles nuevamente sean trasladados los aportes que están en COLPENSIONES al Fondo de Pensiones Porvenir, a nombre de la señora ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO, con cedula de ciudadanía No. 51.902.484de Bogotá. (...).

Esto con el fin de obtener lo más pronto posible el Bono Pensional al cual tengo derecho de acuerdo a lo anteriormente informado”.

Respuesta dada por Porvenir, el 2018-05-10, del que se lee: “(...) efectivamente usted tiene derecho a un bono pensional, con la información que hemos gestionado ante el Ministerio de Hacienda, su bono está representado con un total del 206.14 semanas cotizadas al régimen donde usted venia afiliado antes de trasladarse a un fondo privado como Porvenir y se encuentra emitido desde el 14 de 11 de 1997.

Sin embargo, esta Administradora procedió a solicitar una nueva liquidación de su Bono Pensional a través del interactivo de Oficinas de Bonos Pensionales – OBP, en la cual se registra un aumento en el tiempo laborado por ende en el valor del mismo, de acuerdo con las continuas actualizaciones que realiza Colpensiones a la OBP, razón por la cual es necesario precisar que con el fin de normalizar su historia laboral oficial y solicitar una nueva emisión de su Bono Pensional, se hace necesario nos remita el formato adjunto debidamente diligenciado solicitando la anulación de su Bono Pensional.

Para su respectiva verificación a anexamos el detalle de su historia laboral (interactivo OBP).

Es importante resaltar que el bono pensional se hace efectivo única y exclusivamente para el reconocimiento de una prestación, quiere esto decir, que el valor se verá reflejado en su cuenta de ahorro individual cuando exista un trámite de pensión sea por vejez, invalidez o muerte. (...) ”.

Respuesta emitida el 11 de septiembre de 2019 por Colpensiones y dirigida a la accionante, de la que se lee: “En respuesta a su solicitud de actualización de datos, radicada mediante el número señalado en la referencia, cordialmente nos permitimos informarle, que se realizaron las investigaciones y acciones pertinentes, obteniéndose los siguientes resultados:

Resultado
Periodos 67-94 Empresa donde laboró: ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO Tipo de Requerimiento: Periodo Falta Periodo Desde: 1988-08-01T00:00:00 Periodo Hasta: 1990-04-30T00:00:00 Respuesta Requerimiento: Verificadas nuestras bases de datos, nos permitimos informar que nos encontramos frente a un caso de apellidos diferentes; por lo tanto, dichas cotizaciones no se reflejan en su reporte de semanas cotizadas, por lo anterior se hace necesario suministrar documentos probatorios, tales como: Certificación de escritura, para soportar su reclamación del tiempo requerido. Dichos documentos son indispensables para adelantar el proceso de corrección a la que haya lugar”.

”.
Respuesta expedida por Colpensiones, del 10 de junio de 2019, de la que se lee: “(...) nos permitimos informar, que hemos recibido su solicitud de corrección de historia laboral.

Al respecto, es importante señalar que la respuesta será emitida dentro de los siguientes sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación, en observancia a que este trámite implica un procedimiento operativo especial que está orientado a la corrección integral de su historia laboral, lo cual demanda validación oficiosa de la administración para el cumplimiento de, entre otros, los siguientes pasos:

- 1.Verificación de validez y consistencia de los soportes allegados y de la información de los pagos efectuados o de los de la realización de los mismos.
- 2.Solicitud de información adicional o faltante a los empleadores respecto de los cuales se requieren ciclos faltantes.
- 3.Búsqueda, identificación, validación y cargue de novedades laborales que reposan en archivos físicos microfilmados.”.

De las anteriores actuaciones observamos que la accionante ha presentado diversos derechos de petición ante Porvenir en fechas 01 de junio de 2017, 13 de octubre de 2017, 30 de abril de 2018; y ante Colpensiones; evidenciándose de las respuestas emitidas por las accionadas, que no cumplen con los criterios que la Honorable Corte Constitucional ha establecido en la jurisprudencia, toda vez que no se asegura a través de estas una respuesta clara y de fondo.

Una petición no se considera debidamente tramitado con su recepción, ni tampoco con una respuesta laxa y abierta, pues por mandato constitucional la entidad ante quien se haya elevado la solicitud está en la obligación de proveer al ciudadano de una respuesta pronta que satisfaga plenamente sus deprecaciones, entonces, de no cumplirse con estos supuestos, el juez constitucional, estará en la obligación de requerir a quien vaya en contravía del derecho fundamental para que entre a resolver de manera inmediata el asunto objeto de pedimento, como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional en Sentencia T-523/10 de la siguiente manera.

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**” (subrayado y negrilla por el Despacho).

En consecuencia y dando cumplimiento a lo dicho por la H. Corte Constitucional, y como quiera que, a la presentación de este Instrumento Constitucional, no se ha dado respuesta de fondo, clara y precisa al derecho de petición solicitado por la accionante, se considera que no se han satisfecho los requisitos jurisprudenciales establecidos para tal fin.

En eventos como el del caso bajo estudio, la Corte ha reconocido que la omisión de respuesta constituye una violación de este derecho fundamental, y que además da lugar a su protección mediante la acción de tutela, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias para el funcionario que negligentemente ha omitido cumplir con su deber. Así lo sostuvo esta Corporación en la sentencia T-242/93.

Conforme lo anterior, es posible verificar la diligencia de la demandante en actuar ante la administración, para que sus peticiones sean respondidas, pues interpuso derechos de petición, en más de tres ocasiones según se desprende de las respuestas aportadas

con el escrito genitor; siendo evidente que su querer desde el año 2017 ha sido la corrección de su historia laboral.

Sobre el particular, en sentencia T 101/20 la Corte Constitucional indicó: “Responsabilidad de las administradoras de pensiones frente a la información consignada en la historia laboral de sus afiliados -reiteración de jurisprudencia.

En cuanto a la función de la historia laboral, se recuerda que el sistema pensional de nuestro país requiere que para acceder a un derecho pensional se acredite un número de cotizaciones específico que figura en la historia laboral del afiliado que, además, indica tanto el monto, la relación contractual de la que se deriva, así como el periodo en el cual se hicieron dichos aportes. De esta manera, la historia laboral *“opera como un elemento de prueba definitivo que, a la vez que facilita el acceso del trabajador y de la entidad que administra sus aportes a la información clara, actual y completa sobre el estado de cumplimiento de los requisitos en virtud de los cuales el primero podría llegar a adquirir el estatus de pensionado, propicia el oportuno reconocimiento de la prestación económica y la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales que se protegen a través del mismo”*.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha advertido que adicional al valor probatorio que tiene la historia laboral respecto de los deberes de las administradoras frente al reconocimiento y pago de pensiones, está la naturaleza de la información que allí se consigna la cual, como ya se mencionó, incluye datos de identificación del afiliado, el monto de sus ingresos, su actividad. Es decir, datos sujetos a la legislación actual de tratamiento de bases de datos y archivos que incluyen información de este tipo

Además de la responsabilidad de manejo de información que surge para las administradoras de fondos de pensiones, está aquella dirigida a la custodia, conservación y guarda de la información necesaria para, en el momento requerido, determinar si su afiliado cumple o no con los requisitos para acceder a una pensión, incluyendo los documentos físicos o magnéticos que soportan dicha información, de tal manera que la garantía del derecho pensional de una persona no puede verse comprometida por la presencia de inconsistencias en su historia laboral, atribuibles a problemas operativos o administrativos en el manejo de esos documentos.

Más allá de la simple guarda o custodia de los documentos que soportan la historia laboral de sus afiliados, las administradoras de fondos de pensiones tienen el deber de organizar y sistematizar esos datos, por lo que esta Corporación ha concluido que ***“no es posible trasladarles a los afiliados las consecuencias negativas a los defectos que puedan derivarse de la infracción de ese deber. En ese sentido, los efectos de los errores operacionales en la administración de las historias laborales deben ser, por el contrario, asumidos por la entidad administradora, que cuenta con los medios y la infraestructura para gestionar los datos de las cotizaciones y sus soportes, para evitar su pérdida o deterioro e impedir que el afiliado sufra los efectos negativos que puedan derivarse de cualquiera de esas circunstancias”***.

En ese sentido, del valor probatorio que ostenta la historia laboral del afiliado surge para las administradoras de pensiones la responsabilidad de asegurar que su contenido sea

fiable, es decir, que refleje la realidad laboral de un trabajador pues se trata de su esfuerzo económico por años dirigido a lograr una prestación pensional. Lo anterior permite concluir que es necesario que la información que se encuentra en la historia laboral de un afiliado “**sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada**. Tal es el sentido del principio de veracidad o calidad intrínseco al tratamiento de los datos a cuyo cargo se encuentran la administradora del régimen pensional de prima media y los fondos privados de pensiones”.

Así las cosas, como primera medida, este Despacho concluye que Colpensiones y Porvenir incumplieron su deber de asegurar y velar que la información consignada en la historia laboral de la peticionaria sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada, una labor meramente administrativa en cabeza de la entidad que no puede ser trasladada al peticionario.

Por lo anterior y sin más consideraciones se tutelarán los derechos fundamentales invocados por la accionante, en consecuencia, se ordenará a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y a la **AFP PORVENIR**, para que dentro del término de **DOS (02) MESES** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado por **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484, además, corrigiendo y/o actualizando si fuere del caso la historia laboral. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

Por otra parte, frente a la pretensión del pago del bono pensional, la Corte Constitucional en Sentencia T-056/17 señaló: “(...) No obstante lo anterior, la Corte, por ejemplo, en los eventos en los cuales se discute la liquidación o la emisión de un bono pensional, ha señalado que siempre que este trámite constituya un elemento fundamental para que **se consolide el derecho a la pensión de vejez o jubilación**, y, en consecuencia, un medio para preservar el mínimo vital, la tutela resulta procedente. Para estos casos, el precedente de la Corporación ha desarrollado los criterios de procedencia para el reconocimiento y pago de pensiones a través de acciones de tutela cuando media la exigencia de un bono pensional, señalando:

“(i) La omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, cuando se trata de personas de la tercera edad cuyo sustento depende del reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación. (ii) Los trámites administrativos que dilaten de manera injustificada la decisión de fondo sobre el derecho a la pensión de jubilación, constituyen una vía de hecho que puede dar lugar a sanciones disciplinarias de los funcionarios involucrados. Por último (iii) **la tutela no debe ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional cuando se la utiliza para pretermitir el trámite administrativo correspondiente o cuando se solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante hubiera presentado una solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el bono.**”.

En el presente caso, el reconocimiento del bono pensional no constituye un elemento fundamental para que se consolide el derecho a la pensión de jubilación, pues tal como lo señala la demandante en el escrito de tutela aún no cumple con los requisitos para

acceder a la prestación y su querer es normalizar su historia laboral para a futuro acceder a esta, y tampoco se trata de una persona de la tercera edad que requiera especial tratamiento; tampoco se demostró la afectación al mínimo vital y/o que del pago del bono pensional dependiera la subsistencia de la accionante y su núcleo familiar; consideraciones suficientes para interpretar que en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable.

Además de lo anterior, este despacho Constitucional observa con claridad que la accionante no ha agotado la vía de acción ordinaria y cuando la tutelante cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales, el mecanismo Constitucional es improcedente, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sobre estos requisitos para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho:

“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátase de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”.

De lo anterior en el caso objeto de análisis, no nos encontramos ante un perjuicio irremediable, muy por el contrario, se trata de una contienda de índole legal de la cual debe conocer la jurisdicción Ordinaria para darle solución a la controversia respecto de las inconformidades que alega la accionante, a fin de obtener el reconocimiento del pago del bono pensional, al que considera tener derecho.

En consecuencia y conforme a lo ya expresado, concluye este despacho Constitucional que no se está vulnerando el derecho a la seguridad social y mínimo vital, por lo tanto, no es viable acceder al amparo deprecado

Finalmente, se ordena desvincular a la entidad **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO** atendiendo que de la revisión de los hechos y derechos no se advierte que haya incurrido en acción u omisión que ponga en riesgo o vulnere los derechos fundamentales que invoca.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales **A LA SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL** de la ciudadana **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: TUTELAR EL DERECHO DE PETICIÓN invocado por la ciudadana **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y a la **AFP PORVENIR**, para que dentro del término de **DOS (02) MESES** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado por **ALEXANDRA SAAVEDRA ESPEJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.902.484, además corrigiendo y/o actualizando si fuere del caso su historia laboral . Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. **Ofíciase.**

CUARTO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

QUINTO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

SEXTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

5c0166c7d2f318d3440c080ace0584325570ea4281278bc25ed981a2b0e025d7

Documento generado en 31/08/2020 05:11:38 p.m.